

los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio Altamirano.*—*Simón Guzmán.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México Setiembre 28 de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora por los Señores Antonio Goycoelea y C^a y otros comerciantes, contra el cobro que les hace el C. Administrador de rentas de ese Estado del veinticinco por ciento federal sobre los nueve mil pesos en que contrataron con el Gobierno del Estado, el consumo de la ciudad de Alamos, por un año.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Fiscal cree infundado el amparo, que solicitan algunos comerciantes de la ciudad de Alamos, por el 25 por ciento adicional que se les exige por el Administrador de rentas de aquella misma ciudad, sobre la cantidad de nueve mil pesos que el C. Gobernador del Estado arregló con aquellos comerciantes, según que para ello estaba facultado, y como derecho de consumo, por el término de un año, resistiéndose ahora al pago de ciento ochenta y siete pesos cincuenta centavos mensuales que pertenecen á la federación por la ley general de 16 de Diciembre de 1861. Es tan terminante esta ley en su artículo 1º, que no deja duda que debe pagarse esta cuarta parte de todo

impuesto ó contribución que imponga cualquiera oficina de los Estados y la que debe recargarse á los causantes. De ninguna manera han justificado los quejosos que en ese arreglo que se hizo con el Gobernador del Estado estaba incluido el 25 por ciento federal, del que los Estados de ninguna manera pueden disponer; en consecuencia, los procedimientos de aquel empleado al exigir á los peticionarios el cobro de ciento ochenta y siete pesos cincuenta centavos mensuales que corresponden como cuarta parte de los setecientos cincuenta que se comprometieron á entregar al Estado, son arreglados á la ley ya citada de 16 de Diciembre de 1861; y por lo mismo, al obrar así el C. Administrador, lo hace en la órbita de sus atribuciones, sin que por esto viole las garantías que invocan los quejosos, por lo que pido se decreta, que no hay lugar al amparo que se solicita.

Guaymas, Julio 2 de 1874.—*Jose Monteverde.*

Es copia que certifico. Guaymas, Julio 28 de 1874.—*Lic. Monteverde.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guaymas, Julio 28 de 1874.—Visto el presente juicio de amparo promovido por los comerciantes de Alamos, Señores. Antonio Goycoelea y C^a, Tomás Robinson Bouis, Quirine Corbalá, Parada y Quiroz, Esteban Ortiz, Modesto Güereña, Rafael Almada, Salido Hermanos, Rafael Acuña, Francisco R. Medrano, Bojorquez y Zazucta, Brígido Gil y José M^a Espinosa de los Monteros, contra el cobro que les hace el C. Administrador de rentas, del veinticinco por ciento federal, sobre nueve mil pesos en que contrataron por un año con el Gobierno del Estado, el consumo de la ciudad de Alamos por los efectos nacionales y nacionalizados: Vistos los fundamentos en que se apoyan en su escrito de 25 de Mayo pasado; visto el pedido del Promotor fiscal de este Juz-

gado, en que manifiesta no haber violacion de garantía alguna en los quejosos al hacerles el cobro que del veinticinco por ciento federal les hace el Administrador de rentas; visto el informe de este y documentos que adjuntó en copia; y visto por último cuanto de autos consta y ver convino; y

Considerando: que ni el Gobierno del Estado ni ninguna autoridad, sea quien fuere, está facultado para disponer por ningun motivo del veinticinco por ciento que sobre todo entero hecho á las oficinas federales, á las del Distrito y territorios, y á las particulares de los Estados, incluyendo las municipales, tiene que pagarse, por lo cual no es de suponerse que el C. Gobernador al contratar el consumo de Alamos, comprendiera en nueve mil pesos de que dispuso el Estado, el veinticinco por ciento federal, por estar fuera de sus facultades, si no es que se probara lo contrario, lo cual no han hecho los quejosos; que la disposicion de la ley es terminante cuando dice: "que se pagará el veinticinco por ciento adicional *por todo entero que deba hacerse por cualquier título ó motivo*:" que la razon que alegan los quejosos de estar persuadidos de que la Legislatura del Estado cuando impuso el ocho por ciento de consumo, no obraba en la órbita de sus facultades, no es de tomarse en consideracion en el presente juicio, puesto que en él no se trata de si es ó no legal la imposicion del ocho por ciento de consumo, sino de si en los nueve mil en que fué contratado el consumo de Alamos, está comprendido el veinticinco por ciento adicional ó fuera de dicha cantidad tienen los contratistas que pagarlo.

Que hasta hoy es bien y legalmente cobrado el consumo impuesto en los Estados, pues las sentencias que en contrario hayan pronunciado los Jueces de Distrito, solo aprovechan á los que hayan litigado, sin que pueda alegarse por otros como ejecutorias para dejar de cumplir las leyes ó providencias que las motivaron.

Que mientras por un procedimiento legal

no queden libres los quejosos de la obligacion de pagar esa contribucion principal, es consiguiente que están obligados á pagar la accesoría, porque así lo dispone terminantemente la ley general de 16 de Diciembre de 1861.

Que las otras razones y fundamentos de los quejosos, todas están basadas en un supuesto falso, cual es que ellos estan exentos del pago de ocho por ciento de consumo, siendo que hasta hoy solo lo están legalmente los que han sido amparados por la Justicia federal; y

Considerando por último: que la garantía que concede el artículo 27 de la Constitucion, alegado por los quejosos, no hace al caso de que se trata, pues solo se refiere á la expropiacion de raices, por causa de utilidad pública y previa indemnizacion.

Este Juzgado por sus fundamentos y apoyado en los artículos 101 y 102 de la Constitucion y de acuerdo con el pedido fiscal, falla: Primero: la Justicia de la Union no ampara ni protege á los Señores Antonio Goycoolea y C^a, Tomás Robinson Bours, Quirino Corbalá, Parada y Quiroz, Esteban Ortiz, Modesto Güereña, Rafael Almada, Salido Hermanos, Rafael Acuña, Francisco R. Medrano, Bojorquez y Zazueta, Brígido Gil y José M^e Espinosa de los Monteros, contra el cobro que les hace el C. Administrador de Rentas de Alamos, del veinticinco por ciento federal sobre los nueve mil pesos en que contrataron el consumo de los efectos nacionales y nacionalizados; pues no cree el Juez que actúa, violada en las personas de dichos Señores, ninguna de las garantías que otorga la Constitucion. Segundo: Notifíquese; publíquese en el periódico del Estado y remítanse estos autos á la Suprema Corte para los efectos legales. Fernando M^e Astiazaran, Juez de Distrito de Sonora, definitivamente juzgando, lo decretó, firmando con los testigos de su asistencia ordinaria.—*Fernando María Astiazaran.*—*A.—P. del Rincon.*—*A.—P. A. Piña.*

Es copia que certifico. Guaymas, Julio

28 de 1874.—*Fernando María Astiazaran.*
—*A.—P. del Rincon.—A.—P. A. Pina.*

*Ejecutoria de la Suprema Corte
de Justicia.*

México, Setiembre 8 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora por los Sres. Antonio Goycoolea y C^a, Tomás Robinson Bours, Quirino Corbolá, Parada y Quiroz, Esteban Ortiz, Modesto Güereño, Almada, Salido Hermanos, Rafael Acuña, Francisco R. Medrano, Bojorquez y Zazueta, Brígido Gil, José María Espinosa de los Monteros, contra el cobro que les hace el C. Administrador de rentas del Estado del veinticinco por ciento federal, sobre los nueve mil pesos en que contrataron con el Gobierno del Estado, el consumo de la ciudad de Alamos, por un año. Visto el informe de la autoridad responsable; el parecer fiscal y la sentencia del inferior.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución, se declara: Primero: que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia del Juez de Distrito que negó el amparo á los quejosos. Segundo: Se le impone á los solicitantes la multa de cien pesos.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Simón Guzmán.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, Noviem-

bre 19 de 1874.—*Enrique Landa,* oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Yuculan por los Sres. Tomás Poveda y C^a y el C. Luis Fuente, contra el C. Administrado de fondos municipales que les cobra el impuesto llamado de media patente.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Este juicio de amparo promovido por los Sres. Tomás Poveda y C^a y Luis Fuente, se apoya en el artículo 16 de la Constitución federal, porque afirman los actores, que el C. Tesorero de los fondos de este municipio, contra el cual se ha intentado el recurso, al exigirles el pago de la contribucion llamada de media patente que lo motiva, les infiere en sus personas y posesiones una molestia que no procede de autoridad competente, puesto que conforme á las leyes locales preexistentes que citan en su escrito, solo podía ser autoridad competente para hacer la cuotizacion de aquel gravámen municipal, una junta formada del jefe político del municipio, el subdelegado de Hacienda, el fiscal y dos vecinos nombrados por los tres primeros; resultando por consiguiente, sin competencia alguna la Junta que se formó sin la intervencion del subdelegado y del fiscal, cuyo empleo era incompatible con el de diputado que ejerce; y aun sin conocimiento de los dos vecinos que fueron compelidos á suscribir el acuerdo de graduacion; que sin embargo, cumple y ejecuta el expresado Tesorero. No niega este en su adjunto informe, que las leyes citadas por los quejosos previenen, que las indicadas juntas graduadoras se compongan de las personas referidas; y aunque confiesa que el fiscal de Hacienda era también diputado